

¿Hacia dónde va la Paz?

JAIME ZULUAGA, EDUARDO PIZARRO

¿La paz en Colombia tiene pies? La pregunta asalta a los colombianos después de que el 7 de enero de este año se diera inicio al despeje de los cinco municipios en el sur del país. La aceptación por parte del Estado del viejo requerimiento del despeje formulado por las FARC, al fin parecía ponerle pies a un evento largamente ansiado. No obstante los acontecimientos en marcha desde aquel día de enero resultan de difícil comprensión. El congelamiento de las negociaciones con las FARC, el empantanamiento de los diálogos con el ELN, los asaltos guerrilleros, los asesinatos de extranjeros, los cruentos enfrentamientos entre ejércitos de una y otra denominación, ciertamente tornan compleja la lectura del panorama. El logro de la paz supone la construcción de un denso tejido, de larga duración, para el que es preciso prepararse. Mas en este breve lapso de tiempo es posible visualizar tendencias e identificar puntos frágiles a los que es preciso imprimirle renovadas direcciones. ¿Qué viene entonces sucediendo? ¿Qué habría por hacer para que la paz definitivamente caminara? Con estas preguntas en mente Análisis Político ha invitado al debate a dos de los profesores del Iepri, Eduardo Pizarro y Jaime

Zuluaga, quienes representan dos puntos de vista sobre el proceso.

ANÁLISIS POLÍTICO: En muchos sectores se afirma que el Estado carece de una política de paz. Incluso Manuel Marulanda Vélez, en entrevista concedida a *El Tiempo* en días pasados, afirma que el gobierno planteó la paz como una prioridad estatal pero que sin embargo carece de un norte en el proceso. ¿Qué habría que decir al respecto?

JAIME ZULUAGA: Si entendemos como política una estrategia encaminada al cumplimiento de unos objetivos preestablecidos, la manera como el gobierno ha venido adelantando el proceso parece revelar que no existe política de paz. Hay un objetivo, el de poner fin a la confrontación armada, pero no están definidos, o por lo menos no son conocidos, los medios de los cuales se valdría para alcanzar su realización. Para ilustrar la afirmación conviene señalar lo que ha venido aconteciendo en las aproximaciones con las

dos organizaciones insurgentes. Con las FARC no se definieron con claridad las formas como se manejaría la zona de despeje, cuál era su sentido, qué implicaba la presencia de autoridades civiles. Con el ELN, igualmente, no hay una posición clara sobre las conversaciones, tal y como lo revela la resistencia inicial del gobierno a participar en la Convención Nacional, para luego hacer la petición de hacer parte de ella. El gobierno está construyendo su estrategia en medio del proceso, lo que se traduce en falta de coherencia y en ceder demasiadas ventajas en el proceso de aproximación.

EDUARDO PIZARRO: Comparto plenamente lo planteado con respecto a la ausencia de una política de paz. En la actual administración hubo una enorme demagogia electoral: los ofrecimientos sobre la política de paz que incluían la desmilitarización de cinco municipios estratégicos incluyendo aquel en donde estaba el batallón del ejército más importante en el sur del país, la reunión del presidente con Manuel Marulanda Vélez, errores de muy alto costo. Pero no es solamente esto. Se ha improvisado con respecto al equipo que anima la política de paz. El Alto Comisionado no solamente carece de antecedentes en el cargo, sino que no ha sabido conformar un equipo experimentado. Ello se ha traducido en errores evidentes. Pero si no hay una política si existe una voluntad de paz en el sentido que la administración Pastrana está reflejando el enorme deseo nacional de buscar una solución política negociada al conflicto. En un momento extremadamente difícil por la presencia de una recesión económica como no existía en Colombia desde los años 30, y en medio de un grave deterioro de la legitimidad institucional, las élites sienten la urgencia de una solución al conflicto interno. En las próximas semanas es muy importante que halla un cambio radical, tanto en el equipo como en las modalidades del manejo de las políticas de paz. Ante la posibilidad de firmar un pacto nacional a

favor de la paz, se puede plantear un consenso con diversos sectores de la sociedad colombiana.

JAIME ZULUAGA: Quisiera agregar un punto a propósito de la intervención de Eduardo en torno a la voluntad de paz. Hay interés en casi todos los sectores de la sociedad colombiana en que se supere el conflicto armado, pero voluntad de paz referida al cubrimiento de sus costos no es clara. Las élites piensan en una paz cuyo tamaño consiste fundamentalmente en la desactivación de la confrontación armada y en la desmovilización de los grupos insurgentes con programas relativamente pequeños de adecuación de los excombatientes a la vida en sociedad. Mientras tanto para el polo insurgente la desactivación del conflicto se piensa en relación con reformas de fondo, sobre todo económicas y sociales. En esta disparidad de criterios hay entonces un fuerte desencuentro. Además, del lado del establecimiento hay fracturas, no existen consensos sobre hasta donde se podría llegar en una eventual negociación. Eso hace extraordinariamente difícil el proceso. Hay acuerdo en torno a la solución política del conflicto armado; pero no lo hay sobre las reformas que habría que adelantar a fin de avanzar hacia la equidad y la justicia social.

EDUARDO PIZARRO: Existe un indudable fraccionamiento entre las élites, en medio de un complejo proceso donde los márgenes de cambio en ciertos aspectos son flexibles, mientras en otros impresionantemente inflexibles. Se pueden hacer reformas de carácter político como una nueva constituyente. Empero, plantear en un mundo globalizado como el de hoy una transformación radical de los valores del desarrollo económico, o dedicar el 50% o más del presupuesto nacional a tecnología y gasto social -como dicen los diez puntos de las FARC-, es una cosa totalmente irreal. Tales propuestas tendrían costos catastróficos para la

estabilidad macroeconómica y producirían efectos perversos con respecto a la inserción de Colombia en el mundo moderno. Existe una enorme ignorancia por parte de la insurgencia sobre lo que realmente quiere como proyecto de sociedad. Hace 10 años era muy fácil el modelo, para las FARC la Unión Soviética, para el EPL la China, para el ELN Cuba. Tras el colapso del proyecto socialista se quedaron en desierto ideológico, en enorme incertidumbre sobre que modelo de sociedad plantear. Si por el lado del pueblo no insurgente hay mucho fraccionamiento alrededor de hasta dónde llegan las negociaciones, por el lado de la insurgencia es escandalosa la pobreza de sus planteamientos. Cuando todavía los Colombianos, incluso los más cercanos a la guerrilla, se preguntan lo que proponen, queda una enorme incertidumbre. Algo extremadamente preocupante

JAIME ZULUAGA: Quisiera matizar. Comparto la posición de que del lado del polo insurgente no existe claridad sobre su propuesta de desarrollo económico y social. Pero esa pobreza es relativamente compartida por el establecimiento. El modelo vigente ha hecho crisis, se está hundiendo con consecuencias desastrosas. En este momento nadie sabe que alternativas se le pueden plantear a dicho modelo en cuyo caso la búsqueda de alternativas debe ser común, tanto del lado de la insurgencia como del establecimiento.

Análisis Político: En ese lugar de confrontación entre las apuestas de la guerrilla y las apuestas del Estado, ¿cuáles serían las cosas mínimas negociables de modo que se pueda hacer viable y posible el proceso de paz?

EDUARDO PIZARRO: Para quienes adhieren a un proyecto de sociedad democrático liberal es extremadamente importante iniciar un debate con respecto a cuáles son los aspectos sobre los que no hay disposición de negociación ninguna. La guerrilla no puede llegar simplemente con una agenda abierta donde la nueva

sociedad está determinada por correlaciones de carácter militar. Si las FARC o el ELN plantean que en aquellas zonas donde hacen presencia su influencia militar se tiene que traducir en poder político, introduciendo un modelo de sociedad contrario a los manejos de carácter democrático, se está pisando el plano de lo innegociable. Es preciso plantear la agenda de la democracia, compatible con la agenda de la guerrilla en la lucha contra la corrupción, la modernización democrática, la búsqueda de justicia social; pero en otros puntos pueden existir profundas diferencias. En eso consiste una negociación seria. La administración Pastrana ha planteado un pacto de carácter nacional a fin de iniciar la construcción de una agenda que sirva de base para ir definiendo el marco de una transformación democrática de Colombia.

JAIME ZULUAGA: Insisto en que la administración se ha propuesto como objetivo superar el conflicto, pero no ha definido con claridad el camino, las estrategias para acercarse a dicho objetivo. Probablemente ahí juega la ambigüedad en la que por fuerza se mueven los actores, obligados a jugarle simultáneamente a la guerra y a la paz. El gobierno carece de una propuesta sobre los elementos que a juicio del gobierno, y en representación legítima de la sociedad, serían objeto de negociación. Por el contrario las FARC han propuesto una plataforma de diez puntos donde condensan lo que a su parecer es el punto de partida de la democratización y la transformación de la sociedad hacia un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional. Pero debiera ser el gobierno quien pusiera sobre la mesa, no zonas de distensión y cosas por el estilo, sino la definición de los puntos sobre los cuales debería girar el proceso de negociación.

EDUARDO PIZARRO: Lo que estás planteando tiene varios aspectos que comentaría muy críticamente. Los diez puntos de las FARC son una combinación de

elementos totalmente casuísticos, como un parlamento unicameral o la elección popular del contralor general de la república. Hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico, de justicia social, eso no es definir nada. El gobierno a su turno plantea también diez puntos, que tienen igualmente aspectos casuísticos, pero que afirman una serie de elementos de discusión de cara a un modelo de sociedad. Y me pregunto por qué el nuevo modelo de sociedad debe ser discutido entre los representantes de 12000 o 15000 guerrilleros con el gobierno colombiano; con base en qué legitimidad las cúpulas de las FARC y el ELN, que no sea simplemente un asunto de equilibrio militar, pueden plantear un nuevo modelo de sociedad en Colombia. En el mundo hay una búsqueda extraordinaria de alternativas frente al modelo neoliberal y frente a la insurgencia de izquierda, y todavía estamos esperando respuestas satisfactorias. Se está construyendo desde Europa la llamada tercera vía. Salvo España e Irlanda todos los gobiernos europeos están dirigidos hacia la izquierda. Si no se ha logrado encontrar una alternativa a nivel internacional va a ser muy difícil hacerlo en Colombia. Por otro lado, en todas las experiencias de resolución de conflictos, como El Salvador y Guatemala, se ha planteado que la negociación implica una serie de puntos de incorporación del poder insurgente en la vida, así como una serie de elementos de deseabilidad política en relación con el futuro dependientes en su logro, en buena medida, de la capacidad política del grupo insurgente una vez incorporado. Entonces lo que estás planteando, como lo hacen muchas personas en Colombia, es la vía profundamente antidemocrática y autoritaria: que las élites de la guerrilla definan el destino del país y construyan el modelo de sociedad, cuando ese modelo hay que construirlo en un gran debate nacional. Si se sigue con la idea de que la transformación de Colombia se va a efectuar en unas mesas de negociación entre élites, las propuestas van a carecer de toda legi-

timidad. Hay que diferenciar la agenda de negociación con la guerrilla y la agenda nacional de transformación democrática.

JAIME ZULUAGA: Aceptada la crítica porque no se puede centrar el proceso en la negociación bilateral entre el gobierno y la guerrilla. En legitimidades parciales como la de la guerrilla y parciales también, aunque más amplias desde luego, como la del gobierno nacional, no se puede delegar la resolución del modelo de desarrollo económico y social que le convendría a la mayoría del país. Si algo resulta claro es la necesidad de una participación amplia de diversos sectores de la sociedad. Hasta ahí comparto plenamente tu crítica, pero tengo una diferencia fundamental: la negociación con la guerrilla no se puede circunscribir a las modalidades de su incorporación a la competencia política legal. La negociación, para que sea efectivamente tal, tiene que encontrar los mecanismos que permitan ampliar a otros sectores los canales de participación de modo que se avance conjuntamente en las propuestas de los nuevos modelos de desarrollo. No se si por esa vía se logren construir las alternativas buscadas en otras partes del mundo. Hay una cosa que parecen haber aprendido las guerrillas colombianas -muy probablemente el establecimiento también lo este mirando-: la negociación política de hace nueve años resultó en un modelo de reinserción perverso, que si bien contribuyó a la ampliación del espectro democrático y desató el proceso constituyente, se agotó rápidamente en su capacidad de transformación. Entre otras porque no se logró consolidar un polo político capaz de impulsar los procesos transformadores. En Centro América la negociación política reducida a la incorporación de los grupos insurgentes ha tenido efectos económicos y particularmente sociales muy cuestionables. Es el caso de El Salvador, donde la delincuencia común y el malestar social se han intensificado enormemente. Por eso hay que buscarle salidas nuevas a la situación, no circuns-

critos a un acuerdo político, sino impulsando reformas económicas y sociales. El abandono de las armas o la incorporación a las fuerzas armadas oficiales, sería el resultado de las reformas y sus resultados positivos. Son muy importantes las referencias al pasado y a la experiencia de otros países. Pero muy probablemente nos encontramos ante la necesidad de crear un nuevo modelo de resolución del conflicto armado.

EDUARDO PIZARRO: Si las FARC y el ELN se van a convertir en los supervisores del cumplimiento de los acuerdos, jamás se van a realizar las transformaciones. Si las FARC deciden mantener al país en guerra hasta que se introduzcan los cambios, simplemente están cavando su tumba y la del país. Lo muestra la experiencia Centro Americana: procesos de democratización política en contextos de persistencia de guerra interna, generan efectos perversos que bloquean la participación democrática. El caso de Guatemala es claro. En el 85 se inicia la primera elección democrática pero la persistencia del movimiento insurgente mantiene todo dentro de una camisa de fuerza. La guerrilla no puede pretender convertirse en el policía de la esquina que, si en 5 o 10 años juzga consolidado el proceso, ahí si deja las armas. Es un modelo absolutamente perverso.

ANÁLISIS POLÍTICO: Pero cómo recoger la experiencia directa de Colombia. Se habla de la necesidad de abrir agendas, una en la discusión con la guerrilla, otra en el proceso democratizador. En un sentido general la experiencia de los años 90 es exactamente esa, hay una negociación con la guerrilla para la incorporación de sus miembros a la vida civil y entre tanto se desarrolla un proceso de reforma constitucional. ¿Qué garantizaría que ahora la apertura de agendas si garantice la solución de los problemas que aquejan al país?

EDUARDO PIZARRO: La frustración de 1991 se debe a que el ELN y las FARC no asistieron a la cita histórica de la

Asamblea. Los primeros responsables de esta frustración son las guerrillas, porque esa era la cita histórica de los colombianos con la democracia. Hoy habría una Colombia muy distinta. Evidentemente la negociación con las guerrillas no se puede limitar a cuestiones de incorporación a la vida democrática, pero tampoco se dará allí el escenario de discusión sobre la renovación de la sociedad. Debemos recoger la experiencia de El Salvador donde la guerrilla era mucho más importante que la colombiana, proporcionalmente 10 o 12 veces las FARC en términos de legitimidad política, número de hombres, control territorial. Y el FMLN hizo un pacto nacional de enorme significación que abrió las posibilidades por la vía democrática, para que el movimiento guerrillero accediera al espacio para convertirse en fuerte estamento social. Finalmente los cambios políticos, económicos y sociales deben tener gran legitimidad política. Supongamos que mañana las FARC y la sociedad civil firmen un pacto, por ejemplo, para desmembrar a las fuerzas militares. Careciendo de legitimidad frente a la sociedad, ¿estarán dispuestas las élites a tolerarlo? Es preciso construir una negociación al mismo tiempo ligada con potentes fundamentos de legitimidad política

JAIME ZULUAGA: La experiencia de El Salvador muestra como se logró una reforma política, incluso la reforma de las fuerzas armadas y la incorporación de una parte del movimiento insurgente a ellas. Pero no se ha podido sacar adelante la democratización económica y social, la que más directamente afecta los intereses de las élites. En el año 91 las élites colombianas se vieron obligadas, a pesar de las resistencias, a aceptar la reforma de aspectos de la constitución que tocaban sus privilegios políticos, pero no toleraron ni que les miraran sus privilegios económicos y sociales, ni que se tocaran las fuerzas armadas. La experiencia salvadoreña pone de presente justamente ese hecho: es posible un pacto político, pero es muy

difícil garantizar que de ese pacto se deriven las transformaciones democratizadoras en lo económico y lo social. El resultado de los anteriores procesos de paz es claro para las guerrillas: no quieren el modelo colombiano del M-19 y el EPL de reinserción a cambio de soluciones individuales y programas de apoyo económico, ni el proyecto centro americano de reformas políticas sin que al mismo tiempo se avance en procesos de democratización. En tu argumento existe una cosa que no puedo compartir. Entiendo que la guerra se convierte en obstáculo del desarrollo y la democratización de la sociedad, pero el fin de la guerra no garantiza que la sociedad efectivamente se democratice. De ahí la importancia de aprovechar la coyuntura para que con amplia participación de sectores de la sociedad se logre avanzar, simultáneamente, en la desactivación del conflicto armado y en la definición de reformas económicas y sociales.

EDUARDO PIZARRO: Pero explícame que significa esa transformación. En la actual discusión internacional sobre la izquierda, si subsiste y cuál será su papel en el futuro, se está reviviendo una experiencia muy importante. Mientras la vía revolucionaria dejó pocas raíces –el caso hoy de las enormes dificultades de la antigua Unión Soviética y la Europa del este–, el camino de las transformaciones gradualistas en manos de la social democracia sembró raíces profundas en lo cultural, mayor solidaridad social, menores desequilibrios en los niveles de ingresos y un cierto capitalismo social. Mirando esa experiencia ¿qué significan transformaciones económicas y sociales en el caso colombiano?. Y cuánto tiempo implica lograr una sociedad satisfactoria en esos planos, mucho más bajo la idea de que el ELN y las FARC se van a guardar el derecho de conservar las armas hasta tanto se erija esa sociedad ideal. Qué significa transformaciones. ¿Ley antimonopolios, reforma agraria, reforma urbana, un cambio del código laboral en las relacio-

nes obrero y patrón?. En la experiencia salvadoreña y guatemalteca se plantearon un conjunto de medidas en las que, contando con la existencia de un polo popular organizado y con liderazgo político, se pudiera alcanzar la democratización en una o dos generaciones. No podemos pretender ni que vamos a hacer una revolución socialista, ni a lograr un Estado social simplemente en el curso de unas negociaciones.

JAIME ZULUAGA: Muy importante la aclaración que haces. No se trata ni del movimiento revolucionario fracasado en Europa del este, ni del modelo gradualista del Estado de bienestar que terminó con la hegemonía neoliberal. Se trata, mediante el aporte de sectores de la sociedad de avanzar en la definición de reformas viables. No se piensa en una ruptura radical con la organización capitalista de la sociedad, pero si en modificaciones significativas orientadas, por ejemplo, a afectar la estructura de la sociedad tal como el mercado la produce. En ese sentido es válida una ley antimonopolios. Estos aspectos no se pueden dejar al transcurso del tiempo para que de pronto en 50 años se produzcan cambios, sino que la negociación debe servir para acortar ese tiempo. Sea el caso, en materia de concentración territorial una reforma no significa colectivizar la propiedad, sino ofrecer verdaderas oportunidades de acceso a la propiedad a sectores muy amplios de la población que en este momento, o carecen de ella o están en las fronteras agrícolas sin ninguna posibilidad de integrarse en forma adecuada a la economía de mercado. Democratizar la sociedad desde el punto de vista social tiene que ver con reformas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades para amplios sectores de la sociedad. Aprendiendo de la crisis del socialismo y de la del Estado de bienestar podemos plantear a corto plazo objetivos de transformación que eviten lo que ha pasado en esas sociedades, donde el crecimiento económico se ha traducido en profundización de la concentración

del ingreso y la propiedad. Eso es posible evitarlo con medidas de naturaleza política, y es posible ganarle apoyo en medio de un país destruido por su conflicto interno. Lo que se espera que la sociedad realice en la etapa postconflicto, lo puede hacer en el proceso de resolución del conflicto.

ANÁLISIS POLÍTICO: La demanda de democratización presente en este momento en Colombia, ¿existiría si no estuvieran de por medio la guerrilla y el conflicto armado?

EDUARDO PIZARRO: Una pregunta muy pertinente porque en buena parte de Colombia se ha creado la idea de que la democratización es el resultado de los actores armados. El M-19, autodefinido como la democracia, en armas, no se entendía como parte de un proyecto de carácter socialista sino como agente de un proyecto democratizador. La guerrilla produce un efecto doble. Por una parte presiona la democratización; pero por el otro la persistencia del conflicto armado agrava la dimensión antidemocrática del sistema político. Muy buena parte del endurecimiento autoritario hoy existente es resultado de la persistencia del conflicto. Si el ELN y las FARC se reincorporan a la vida democrática pueden producir un impacto democratizador, pero si continúan el conflicto van a seguir agigantando las tendencias autoritarias y fascistas del sistema político.

JAIME ZULUAGA: La pregunta me parece muy importante. Alguna vez Gonzalo Sánchez planteó que el país tiene una deuda con la guerrilla. Gracias a la persistencia del fenómeno insurgente se ha terminado por aceptar como problemáticas algunas de las cuestiones planteadas por la guerrilla, de otra manera sepultadas por la tradición elitista de no hacer concesiones a los sectores populares. Pero comparto la idea de que esto entraña un riesgo, a mi juicio en dos dimensiones. El ya señalado, la presión guerrillera resulta positiva en la genera-

ción de un movimiento favorable a la democratización de las instituciones; si no se maneja adecuadamente puede conducir evidentemente al fortalecimiento de las tendencias militaristas y autoritarias. Pero además el espacio que ocupa la presión armada, así este generando una dinámica democratizadora, le resta espacio al movimiento democrático legal. De continuarse el conflicto el resultado sería negativo.

EDUARDO PIZARRO: Quisiera precisar algo frente a lo de la deuda del país con la guerrilla. La persistencia de la guerra agravó los enclaves autoritarios en el país. Desde una lectura retrospectiva, muy compleja, se puede decir lo contrario a lo que afirma Jaime. Si la guerrilla no hubiera existido probablemente Colombia sería hoy mucho más democrática, porque hubiera nacido una izquierda democrática, un movimiento social más organizado, un tejido social más sólido. Cuando en 1990 la guerrilla rectifica el predominio de la lucha armada, paga una deuda que tenía con Colombia, cual era la de no haber militarizado en forma extrema la lucha y haber impedido, por esa vía, la gestión de un espacio de izquierda socialista de carácter democrático. Ambas lecturas pueden ser válidas. En un futuro los historiadores podrán dilucidar un debate de tal significación e importancia.

JAIME ZULUAGA: Vale la pena ver la diferencia. No sostengo que gracias a la presencia guerrillera se abre el debate de la democratización. Pero ha jugado un papel determinante en el sentido de que sectores refractarios probablemente no aceptarían la cuestión sin la fuerte presión guerrillera de los últimos años. Quizás si no hubiéramos tenido guerrilla tendríamos una izquierda democrática legal fuerte. Pero no hay que olvidar la experiencia histórica. La UNIR de Gaitán, no propiamente una izquierda radical, no prosperó desmontada por la hegemonía de los partidos tradicionales. El MRL de

López, como él mismo lo confiesa, fue tolerado como una manera de canalizar hacia el bipartidismo el malestar social de aquella época. La ANAPO fue desmontada y combatida en un momento en que las guerrillas estaban en proceso de declinación. Entonces también hay una acción desde las élites que ha limitado las posibilidades de fortalecimiento de un polo democrático, sobretodo de un polo de izquierda.

EDUARDO PIZARRO: Pero si ese es el papel de las élites, ser hegemónicas y mayoritarias. El problema es que nunca se ha construido una alternativa democrática. Probablemente los sectores autoritarios no existirían si desde hace 20 o 30 años hubiéramos tenido un gran polo popular y democrático; o al menos el autoritarismo sería débil.

JAIME ZULUAGA: Pero qué decir de procesos como la pausa de la revolución en marcha de los años 30. En ese momento, libre de violencia, una coalición de las élites cercó la posibilidad de ampliación de los espacios de participación y democracia. El debate de los años 30 era sobre la modernización de la sociedad, bien con participación popular, bien sin participación popular. No obstante las élites, continuando una tradición iniciada en el siglo XIX, optaron por la clausura del proceso. Con sus políticas excluyentes las élites han contribuido como el que más a la producción del fenómeno insurgente.

EDUARDO PIZARRO: Hay más insuficiencias en el polo popular por ausencia de proyectos y de capacidad de configurar polos de carácter democrático y popular, que por cualquier otra cosa. Esas lecturas que siempre ven por fuera de, que siempre ven el bloqueo bipartidista y de las élites, cercenan la capacidad autocrítica. El polo popular tiene que empezar a mirarse al espejo, asumir sus responsabilidades históricas y ver donde han fallado.

ANÁLISIS POLÍTICO: Esto nos lleva finalmente al nudo del debate. ¿Que entender entonces por democratización? ¿Que significaría en este momento una demanda de democratización que construya la paz en Colombia?

EDUARDO PIZARRO: En este momento existe un extraordinario debate a nivel internacional. Fracasado el socialismo real e igualmente el neoliberalismo como doctrina hegemónica, se están abriendo dos grandes corrientes hacia el centro del espectro político con menos polarización que en el pasado. Una, denominada la tercera vía reflejada, si se quiere, en el socialismo democrático liberal predominante en Europa; otra, algo que se viene construyendo en América Latina denominado la cuarta vía, una lectura alternativa tanto a la social democracia a la europea, como a los discursos minoritarios pero existentes de radicalismo político propios del pasado. En esta cuarta vía se está planteando fundamentalmente, en primer lugar, la reconstrucción de la capacidad de los poderes públicos legítimos para mantener cierto control sobre los procesos internos, en contra de las tendencias de pérdida total de la soberanía nacional propias de las lecturas globalistas neoliberales. En segundo término la posibilidad de reducir el papel hegemónico del mercado al plantearse la importancia del Estado como factor regulador de la economía y esencialmente como garante de una redistribución de los ingresos a fin de construir justicia social. Y en tercera instancia se sugiere el paso de una democracia puramente representativa y liberal, a una democracia con nuevos espacios como los de la democracia directa y participativa. Lentamente se está construyendo un discurso que puede servir de base para el debate de Colombia en los próximos años.

JAIME ZULUAGA: Comparto el planteamiento de la reconstrucción de los poderes públicos legítimos, la recuperación del papel del estado frente a la pretendida

hegemonía del mercado, y la necesidad de avanzar en nuevos espacios que vayan mas allá de la democracia liberal, principalmente los que tienen que ver con la participación. Pero quisiera enfatizar algunos aspectos. Colombia tiene una serie de tareas históricas atrasadas. No hemos vivido la experiencia de regímenes de democracia liberal plenamente desarrollados como acervo de una tradición de cultura política democrática. En esa perspectiva en Colombia hay aprendizajes y espacios por conquistar. El primero de ellos, indudablemente, reconstruir el papel de un Estado con capacidad de regulación del mercado con el objeto de controlar los efectos de desarticulación del tejido social provocados por una economía liberada a su propia dinámica. Segundo, ese papel del Estado no se limita únicamente a la redistribución del ingreso, sino a una redistribución del poder político; venimos de prácticas políticas profundamente excluyentes en las que, incluso, no se han logrado materializar los espacios de participación abiertos institucionalmente por la constitución del 91. Las guerrillas han luchado durante 30 años por la conquista del poder y no lo han logrado, en cuyo caso, ante la imposibilidad de eliminarlas militarmente, es preciso integrarlas en un proyecto unitario que pasa por la redistribución del poder. Tercero una redistribución de la propiedad. Esta sociedad debe no solamente redistribuir los ingresos, sino también la propiedad, no expropiando a los que tienen, sino haciendo posible que los que no tengan empiecen a tener. El país no se puede continuar con políticas agrarias marginales, con programas de colonización expulsando a la gente a fronteras desvinculadas del desarrollo económico. Y en cuarto lugar, cosa muy clara en el pensamiento liberal, una redistribución de oportunidades mediante la construcción de instituciones que lo permitan. El país necesita una profunda reestructuración política, no solamente en mecanismos electorales y participativos, sino en la edificación de instituciones reorganiza-

doras del poder, la propiedad y las oportunidades.

EDUARDO PIZARRO: La dialéctica izquierda derecha, basada en una cierta dinámica amigo enemigo característica del siglo XX, se está convirtiendo en una nueva dinámica hacia el centro del espectro ideológico. A partir de esta década el mundo va a girar en torno de un centro izquierda y un centro derecha, donde van a haber enormes consensos, pero igualmente importantes diferencias localizadas en términos de los valores eternos de la izquierda, esto es la justicia, la igualdad, la democracia política acompañada de democracia social y económica como garante de la igualdad de oportunidades. En el panorama que se va delineando hacia el siglo XXI Colombia tiene que permanecer muy sensible a ese debate internacional. Tenemos que construir acuerdos sobre lo fundamental respetados por todos los actores levantando en ese marco una izquierda democrática que luche por los valores eternos de la izquierda, esos que van mas allá del debate sobre un buen desarrollo económico al estar fundados en valores esenciales definidos desde la revolución francesa.

JAIME ZULUAGA: La pregunta allí sería qué es ser de izquierda al final de este siglo y en el nuevo contexto en que nos estamos desenvolviendo. Lo expresaría en términos muy simples. Ser de izquierda hoy es ser partidario de la justicia social. En el caso colombiano implica inclinarse a favor de los derechos y las posibilidades de los que históricamente han estado excluidos de los beneficios del desarrollo económico y la participación en el poder político. La superación del conflicto armado, no será posible si no se formula un programa de transformaciones sociales de esa naturaleza, un paso hacia gobiernos de reconciliación.

ANÁLISIS POLÍTICO: En medio de este posible escenario político y de cara a la

paz, ¿qué sería lo innegociable en el proceso de conversaciones?

EDUARDO PIZARRO: Agenda abierta significa que se pueden tratar todos los temas, pero no significa abandonar una serie de principios fundamentales. No se puede negociar el pluralismo, es inaceptable la tesis del partido único. No se puede negociar la existencia de una economía de mercado, pues las economías planificadas centralmente no mostraron viabilidad como modelos económicos. No se puede negociar la idea del pluralismo ideológico, de espacios para todas las corrientes de pensamiento. Sería inaceptable la existencia de una doctrina única de Estado. Es muy importante plantear la posibilidad de un debate abierto con los movimientos insurgentes, con agenda abierta, pero al mismo tiempo hay principios de un proyecto democrático social liberal innegociables.

JAIME ZULUAGA: No es negociable el imperativo de la organización de una sociedad que garantice la autonomía para el desarrollo de los individuos. Ese es un principio básico del funcionamiento de la sociedad moderna, individuos con libertad, con libertad política. En ese sentido no cabe ningún proyecto totalitario, que por lo demás no está en la mente de ninguno de los actores involucrados en el conflicto. Otro punto innegociable es la necesidad de la ampliación y fortalecimiento de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos como una divisa política del desarrollo de la autonomía de los individuos. No es negociable la democracia, entendida como la posibilidad efectiva de participación de los individuos en la conducción de los asuntos públicos.

EDUARDO PIZARRO: Añadiría dos puntos. El primero, es innegociable una solución basada en la exclusión de un sector de la sociedad. Se escucha decir que hay que construir un gobierno popular en detrimento de otros sectores sociales. Si se va hacia una solución ne-

gociada al conflicto, implica que todos tendremos cabida a partir de ciertos acuerdos sobre lo fundamental. El segundo, me parece innegociable cualquier proyecto que plantee una federalización del país en términos de crear repúblicas, tal como aparece en propuestas de autonomía territorial en lo político, en lo judicial, en lo policial. Eso rompería la unidad nacional.

JAIME ZULUAGA: La negociación no implica la derrota del otro, sino un proceso de reconciliación que compromete la reconstrucción de la sociedad con la participación de diferentes sectores. Colombia es un país de regiones, aspecto nunca tenido en cuenta en el ordenamiento político y administrativo. El fortalecimiento de unidades y desarrollos regionales no conspiran necesariamente contra la unidad nacional. Más bien una falsa unidad centralista, como la existente en Colombia, ha implicado el sacrificio de enormes potencialidades de desarrollo regional.

ANÁLISIS POLÍTICO: En las actuales circunstancias cuáles serían las estrategias fundamentales para animar el proceso de paz.

EDUARDO PIZARRO: El proceso de paz, en buena medida, desbordó la capacidad de los actores internos. Se requiere por tanto la internacionalización del proceso, una movilización de la comunidad internacional a través del grupo de países amigos, de la Unión Europea, y de un importante papel de Washington y del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Tal movilización internacional debe servir para meter en cintura a todos los actores a fin de volverles muy costosa, no solamente la posibilidad de ruptura del proceso de negociación, sino los excesos que vienen cometiendo. Pero igualmente el proceso de paz requiere una enorme movilización de la comunidad nacional. Sin esta movilización interna va a ser difícil lograr resultados. En buena medida el éxito, mas allá de la voluntad mayor o menor de cada uno de

los actores implicados, va a depender de los agentes externos e internos.

JAIME ZULUAGA: Comparto la posición pero agregaría que hay que continuar fortaleciendo el movimiento ciudadano. Es preciso romper el exclusivismo con que el gobierno ha pretendido dirigir este proceso renunciando a la posibilidad de contar con apoyos internos muy importantes. Por otro lado, para que efectivamente haya negociación hay que acercar a las partes mediante el paso de los enunciados generales, sobre los que en principio existe acuerdo, a la formulación de las exactas dimensiones de las reformas a discutir. Comparto la opinión sobre la presencia de la comunidad internacional, no se bajo que modalidad, pero este conflicto necesita una veeduría internacional que permita humanizar la guerra.

ANÁLISIS POLÍTICO: *Que cosas debería hacer el gobierno para dotarse, al fin, de una política de paz.*

EDUARDO PIZARRO: Hay voluntad de paz por el elevado costo del conflicto en todos los órdenes, pero ello no se está traduciendo en una política de paz, como dije antes. Para superar ese estado de cosas se requiere, primero, rediseñar el equipo gubernamental responsable de la política, y segundo elaborar, en términos estratégicos, cuáles las herramientas, métodos y objetivos del proceso de negociación.

JAIME ZULUAGA: No hay política de paz de gobierno y tampoco política paz de Estado. Hay acciones de gobierno encaminadas a desarrollar las conversaciones, pero con muy poca coherencia en su desarrollo. Para diseñar una política de paz de Estado es necesario convocar a las diferentes instituciones estatales. Ahí existe una fuerte obligación del ejecutivo, en tanto la constitución le confiere el mandato de asumir la conducción del orden público. Además esa política debe estar acompañada del intercambio y discusión

con diferentes sectores de la sociedad. Esas son las dos condiciones fundamentales para una mirada estratégica sobre el proceso de paz que escape a las necesidades y angustias de un gobierno en particular y abra canales de participación y solidaridad, no de competencia como se ha venido viendo en estos meses, donde el congreso tiene que disputarle al ejecutivo la posibilidad de hablar con los actores de la confrontación o donde diferentes sectores de la sociedad se ven absolutamente excluidos de la posibilidad de aportar al proceso.

EDUARDO PIZARRO: Pero eso implica una enorme responsabilidad por parte de los actores de la sociedad civil, del parlamento, de los gremios y de los políticos, porque el protagonismo con agendas ocultas no contribuye a la paz. Los protagonismos particulares no son una contribución. Se le debe exigir una enorme responsabilidad al Estado, pero otro tanto a los actores de la sociedad civil que convierten la paz en un escenario de protagonismo individual para ganar liderazgo nacional. Ese fenómeno dramático de América Latina y en general del mundo, en el que se pasó de campañas electorales cada cuatro años a campañas permanentes es dañino. Serpa, Nohemí, Juan Manuel Santos ya están en campaña electoral para el año 2002 y evidentemente muchas de sus actuaciones no responden a los requerimientos de la paz, sino a acomodados frente a la campaña venidera.

JAIME ZULUAGA: De acuerdo, pero no se puede seguir presumiendo que es imposible conseguir esa responsabilidad pensando en los antecedentes, sino que hay que buscar lograr esa responsabilidad. Es una tarea del fenómeno de construcción política y democrática urgente en un Estado tan desarticulado como el nuestro, donde los poderes más que moverse en función de un proyecto de Estado lo hacen rivalizando entre ellos. Lo mismo ocurre desde luego en la sociedad.

ANÁLISIS POLÍTICO: Que habría que exigirle a la guerrilla para que efectivamente se pudiera decir que tiene voluntad de paz.

EDUARDO PIZARRO: Después del asesinato de los tres norteamericanos defensores de los indígenas y del ingeniero francés, es claro que a la guerrilla hay que exigirle el irrestricto respeto del derecho internacional humanitario. En el mundo globalizado de hoy las FARC no pueden seguir argumentando que ellos no lo respetan porque tienen su propio código humanitario, ciertamente uno muy laxo que les permite secuestrar, asesinar fuera del combate, realizar "pescas milagrosas". El derecho internacional humanitario, como ya ha sido construido por consenso en la civilización occidental, debe ser el código mínimo para los actores armados. Esa debe ser la prueba de buena voluntad frente al proceso de paz.

JAIME ZULUAGA: La voluntad de paz es algo que se construye, no existe en abstracto. Lo importante es sentarse a una negociación e iniciar un proceso en el cual, a medida que se vayan haciendo las aproximaciones, se construyan las voluntades. Lo que sí resulta indispensable es el establecimiento de regulaciones precisas del conflicto mientras se avanza en la negociación. Pero la exigencia de respeto al derecho humanitario no puede ser unilateralmente dirigido hacia la guerrilla sino que es una exigencia para todos los actores del conflicto, incluyendo a las fuerzas armadas y desde luego al Estado, quien tiene una responsabilidad política y ética ante la sociedad. Como dice el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos, la guerrilla puede ser responsable del 25% de las violaciones y las fuerzas armadas apenas del 5%. Pero éticamente pesa mucho más ese 5% pues se trata de quien debe velar por que las violaciones no se produzcan. Lo cual no justifica las violaciones de la guerrilla ni las hace menos graves. Pero la rectitud total del Estado es indispensable para construir legitimidades.

EDUARDO PIZARRO: Discrepo profundamente en este punto por una razón simple. Discursos como ese conducen a un relativismo moral y político: destruimos el oleoducto pero la industria colombiana genera mas polución; atentamos contra los derechos humanos pero el Estado lo hace mucho más. Si la guerrilla se autodefine como el proyecto más profundamente democrático y humanista de la sociedad colombiana, tiene que seguir umbrales de respeto no condicionados a que nadie más lo haga. La guerrilla tiene una obligación histórica frente a sí misma y frente al país, la de ser los que en primer término respetan la vida sin ningún tipo de condicionamiento. Si se autodefinen como el futuro deben comportarse ya como el futuro.

JAIME ZULUAGA: Una vez en Bolivia el Che Guevara tenía preparada una emboscada en la madrugada a un destacamento del ejército. Los soldados pasaron dormidos y el Che no dio la orden de ataque. Ante las increpaciones de sus combatientes respondió que los soldados iban dormidos y no se puede disparar contra hombres indefensos. Una actitud de estas nadie la practica en Colombia. Exigir respeto de todos no es un discurso de relativismo en donde lo que hagan unos se justifica por lo que han hecho los otros. Empero, no se le puede exigir solamente a un actor en un conflicto tan complejo, en donde de lado y lado se viola el derecho internacional humanitario.

EDUARDO PIZARRO: Sigo discrepando pues hay que exigirle a todos, pero fundamentalmente a la guerrilla, porque si un actor no cree en lo que uno piensa, por lo menos debe ser coherente con lo que él piensa. Carlos Castaño dice, "vamos a seguir asesinando fuera de combate campesinos amigos de la guerrilla" y su discurso es coherente con el tipo de genocidios que perpetra. Eso no lo justifica, pero lo hace coherente con lo que piensa, mientras que la guerrilla se

autoddefine como el nuevo humanismo pero sus prácticas contrarían todo su discurso.

JAIME ZULUAGA: Eso nos mete en la lógica relativista que criticas. Al Estado, que tiene la función de garantizar la defensa de los derechos humanos, hay que exigirle que sea absolutamente respetuoso del derecho humanitario. A la guerrilla también, a los paramilitares y a todos aquellos que se involucren en el conflicto. Comparto que quien se dice portador de un proyecto de sociedad diferente debe dar desde ya muestras de coherencia, pero eso no suprime la exigencia sobre la contraparte, coherente o no con su pensamiento. A Castaño tenemos que exigirle que sea incoherente con lo que dice, pero que respete el derecho humanitario.

ANÁLISIS POLÍTICO: A propósito de esta discusión y señalando un punto no considerado en la conversación. ¿Cómo entrarían los paramilitares en el proceso de paz?

EDUARDO PIZARRO: Reitero una visión que he sostenido desde hace muchos años. A los paramilitares hay que combatirlos militarmente. Ellos no son un actor político sino una masa muy compleja de movimientos de diferente origen, naturaleza, intencionalidad y objetivos. A pesar del estado mayor conjunto logrado por Castaño sigue habiendo una enorme autonomía de cada grupo. Seguir titubeando sobre si son actores políticos o delincuenciales lo único que ha producido es inmovilismo en el Estado, que ni los combate ni los apoya abiertamente. La experiencia de otros lados es muy clara. En El Salvador hubo un condicionamiento muy fuerte, por parte de la comunidad internacional, en el sentido de que el ejército tenía que desligarse de los escuadrones de la muerte. Cuando se les combatió eficazmente se creó el clima de confianza para que el FMLN entrara a negociar.

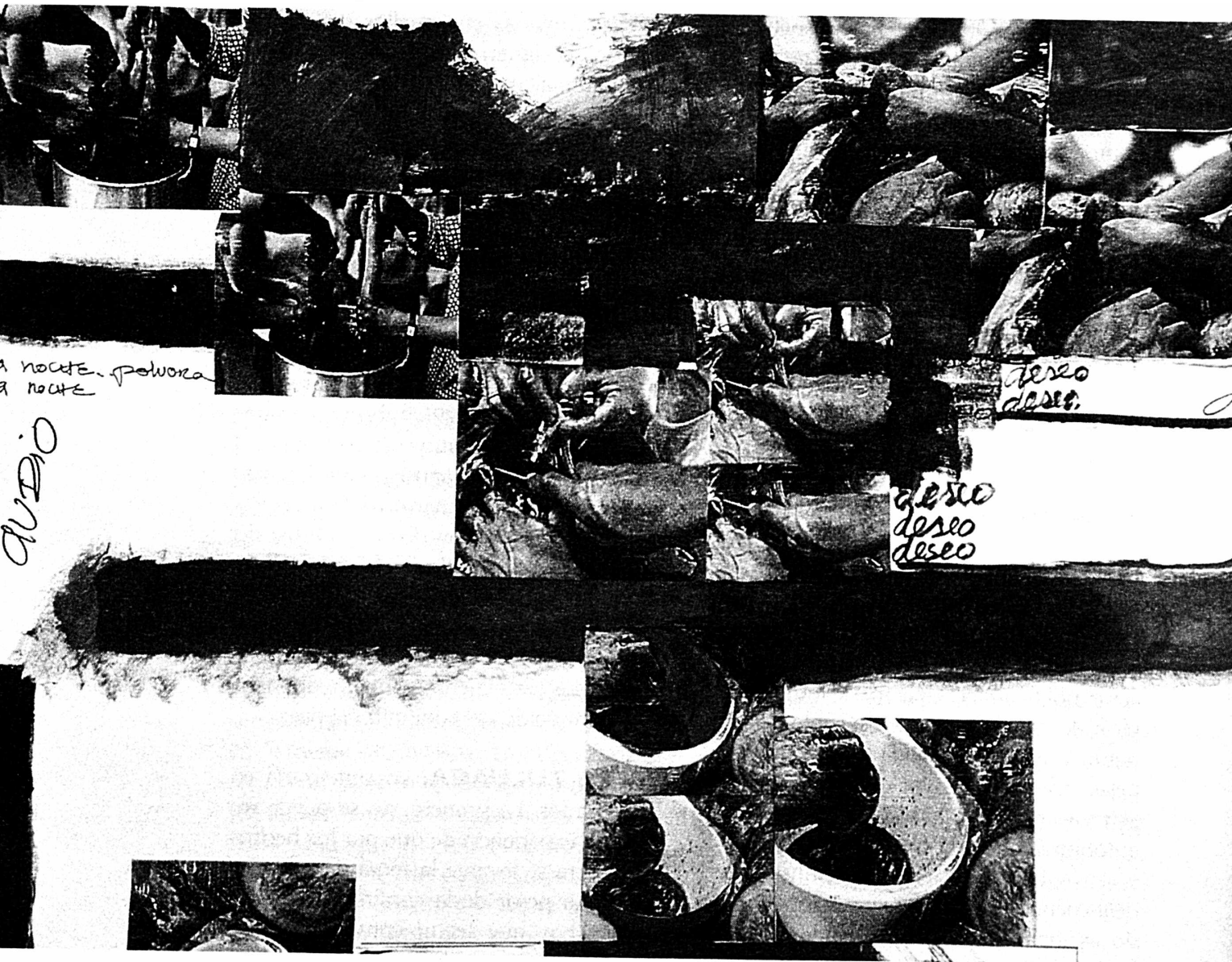
JAIME ZULUAGA: Totalmente de acuerdo, solo agregaría lo siguiente. Para

que una política de combate a los paramilitares sea efectiva se requieren dos condiciones. Primero, un poder político suficiente por parte del ejecutivo a fin de neutralizar la solidaridad y las complicidades de los poderes locales y regionales que los financian, apoyan y encubren. Segundo, depurar profundamente las fuerzas armadas en aquellos sectores en donde se siguen sosteniendo vínculos con paramilitares.

ANÁLISIS POLÍTICO: Y para cerrar. ¿Qué es lo que no se puede repetir de las experiencias anteriores de paz en Colombia?

EDUARDO PIZARRO: Todo proceso de paz tiene sus particularidades. La diferencia fundamental hoy es que se requiere un debate nacional para construir un gran consenso sobre la Colombia del próximo siglo. En 1991 hubo una Asamblea Nacional Constituyente votada por 4 millones de colombianos, la votación más escasa de la historia nacional. Hoy requerimos la construcción de la Colombia del siglo XXI que a diferencia del pasado debe pasar de ser un debate entre élites, sean guerrilleras, estatales o de la sociedad civil, a ser un gran debate nacional en el que los acuerdos construidos tengan el respaldo del conjunto del país.

JAIME ZULUAGA: Lo sintetizaría en tres puntos. Lo primero, no se puede repetir la experiencia de que por los hechos de guerra se levante la mesa de negociaciones; a pesar de la continuación de la guerra hay que seguir conversando. Lo segundo no se puede repetir la experiencia de un acuerdo entre la cúpula guerrillera y el ejecutivo nacional, sino que se necesita hacer de este proceso de paz el escenario de un gran acuerdo nacional para avanzar efectivamente en la refundación del Estado y la sociedad. Y en tercer lugar, así sea por esta vía Colombia necesita insertarse de una manera diferente en la comunidad internacional y el escenario de las conversaciones de paz puede ser importante para ello.



AUDIO

a noite. polwora
a noite

deseo
deseo

deseo
deseo
deseo